

La CGT frente a la crisis neoliberal. O el elemento nacional popular de la coalición neodesarrollista

Cecilia Anigstein (UNGS-CONICET)

Resumen

El nuevo orden socioeconómico produjo una reorganización de las alianzas sociales y transformó el dinamismo de los diferentes actores. Debilitados y desarticulados, organizaciones de trabajadores y empresarios convergieron en una alianza de carácter defensivo, en cuyo seno el socio menor –el movimiento sindical– se desempeñó de forma contradictoria, errática y fragmentada. Este trabajo examina el accionar de los sindicalistas de la CGT en la configuración de la coalición sociopolítica que promovió un programa neodesarrollista como alternativa de salida a la crisis neoliberal.

Palabras claves: Confederación General del Trabajo (CGT), Crisis neoliberal, Neodesarrollismo, Matriz nacional popular.

Abstract

The new economic order was a reorganization of social alliances and changed the dynamics of the different actors. Trade unions and employers converged in a defensive alliance. The weaker partner (unions) acted inconsistent, erratic and fragmented. This paper examines the actions of the CGT in the construction of socio-political coalition that promoted the neo developmentalism as an alternative to the neoliberal crisis.

Keywords: Confederación General del Trabajo (CGT), neoliberal crisis, Neo developmentalism, Populism.

Recibido 24.11.2014 Aprobado 23.02.2015

Introducción

Durante los gobiernos kirchneristas los valores, ideas e imágenes sociales asociadas a lo nacional popular peronista experimentaron un relanzamiento. Esta reactualización dejó al descubierto el carácter paradójico de la matriz sociopolítica emergente en el ciclo en curso. Planteó una serie de interrogantes acerca de las especificidades del proceso de recomposición político institucional postneoliberal que involucró, asimismo, una renovada vitalidad de las organizaciones del trabajo. Posible en un contexto de disminución del desempleo, reindustrialización sustitutiva y dinamización del mercado interno. El clima social imperante en esta etapa favoreció reformas que rectificaron parcialmente el impulso hacia la individualización, informalización y precarización de las relaciones y mundos del trabajo presente desde mediados de los setenta y profundizada en los noventa, en el contexto de la ofensiva conservadora neoliberal.¹

Es que la salida de la convertibilidad representó una contradictoria derrota de la política neoliberal. El patrón de

acumulación emergente se apoyó en una exacerbada transnacionalización, concentración y centralización del capital en la economía; el rol estratégico de las ramas exportadoras y la precarización laboral como elemento estructural del trabajo (Feliz, 2012, Wainer, 2012). El restablecimiento del orden luego de la debacle social de 2001 requirió dos condiciones: 1) modificación de las políticas macroeconómicas para reencauzar el proceso de valorización, y 2) una recomposición político-institucional. En ambos aspectos, la salida exigía una perspectiva anti-neoliberal, que debió montarse, paradójicamente, sobre las condiciones establecidas por el modelo de desarrollo precedente (López, 2012).

¿Qué fracciones sociales revelaron pretender y/o se disputaron la hegemonía en el proceso de valorización capitalista en Argentina a fines de los años noventa? ¿Cuáles lograron superponerse e imponer su propio proyecto de salida a la crisis? ¿Con que aliados contaron? ¿Quiénes fueron los ganadores y perdedores del ciclo postconvertibilidad? ¿Qué continuidades y discontinuidades se registran en términos de grupos dominantes y subalternos?

Visto el proceso histórico no desde las disputas interburguesas sino desde la experiencia de la clase trabajadora, es necesario retrotraerse al menos al momento de la constitución de la hegemonía neoliberal en Argentina. Desde este ángulo, el fenómeno hiperinflacionario de

1989-1991 fue una ofensiva expropiatoria del capital contra el salario obrero, pero fundamentalmente implicó una forma de violencia económica y privada que hizo posible la instauración de una nueva hegemonía fundada en una “paz monetaria”. Es decir, la convertibilidad no fue sólo una política antiinflacionaria, sino una política de disciplinamiento social generalizado que utilizó la estabilidad monetaria como una de sus herramientas centrales y logró incidir sobre el comportamiento de las clases, constriñendo a los trabajadores y fracciones subordinadas de la burguesía a aumentar su productividad bajo coacción económica (Bonnet, 2008).

En este contexto, la estrategia prevalente en el movimiento obrero organizado fue la supervivencia organizativa a partir de la adaptación y convalidación de las reformas neoconservadoras, a pesar de la pérdida de peso en la sociedad (Collier y Etchmندی, 2007; Bonnet y Piva, 2012; Murillo, 2013; entre otros).

Pero también se registraron intensas resistencias. Y aunque hay que reconocer que involucraron a nucleamientos minoritarios del movimiento obrero organizado (MTA, CTA, CCC), debe destacarse la creciente resonancia política que fueron adquiriendo a lo largo y ancho del país. Sumado a ello, recalcar la impronta nacional popular que caracterizó a las luchas antineoliberales de fines de los noventa (Martuccelli y Svampa, 2005).

Los dos tipos de respuesta articuladas por el movimiento obrero organizado: la resistente –el sindicalismo combativo del MTA y el sindicalismo social de la CTA (Gomez, 2009)- y la supervivencia adaptativa –denominada también participacionista (Gomez, 2009)- resultan centrales para comprender como se inscribió el sindicalismo en la coalición neodesarrollista que emergió en la crisis de la convertibilidad.

Cuando se observa la dinámica del movimiento obrero en los años noventa, desde el punto de vista de sus luchas y formas de acción, la primera constatación que surge el carácter disminuido y fragmentario de la conflictividad como rasgo distintivo. De hecho entre 1989 y 2001 se observa una disminución general de la cantidad de conflictos protagonizados por los trabajadores asalariados (Piva, 2006).²

Aunque es destacable que entre 1992 y 2002 se realizaron 17 huelgas generales. De éstas, al menos 14 tuvieron una adhesión superior al 50%, 6 adhesión superior al 75% (09/11/1992; 27/09/1996; 23-24/11/2000; 21/03/2001; 13/12/2001), según estimaciones de medios de prensa (Iñigo Carrera, 2010).³

2. Piva (2006) utiliza datos del CEI de la Universidad Nacional de Quilmes (que registra conflictos de trabajadores ocupados y desocupados entre 1989 y 2003).

3. ¿Pero es posible establecer una correlación simple entre huelgas generales (su convocatoria, acatamiento y grado de aislamiento social) y conflictividad obrera general? Para Piva (2006) el

En los años de mayor conflictividad del período (1993 y 1994), la CGT no convocó ninguna huelga general. Paradójicamente, la mayor actividad huelguística de la CGT se localizó entre 1995 y 1996, años de descenso de la cantidad de conflictos. El motivo de esas acciones se halla fundamentalmente en el impulso gubernamental para desregular las obras sociales y avanzar sobre el poder sindical en la administración de la salud y sus prestaciones. Otro panorama se presenta cuando se miran las acciones convocadas por el MTA y la CTA. Desde la convocatoria a la primera huelga en 1994 su actividad no cesa, y tienen un comportamiento similar a la CGT ubaldinista de los ochenta. De hecho, mientras que la CGT disidente⁴ (conducida por

problema de una operación analítica semejante impediría observar momentos de desacople entre el comportamiento de la dirección sindical nucleada en la CGT y las tendencias del conflicto obrero. Justamente esto fue lo que sucedió durante los años noventa. En los ciclos de lucha de los años ochenta fue coincidente una actividad huelguística permanente de la CGT con un contexto ascendente de la conflictividad general entre 1984 y 1989. Sin embargo, hacia 1989 se dieron las primeras fracturas y el aislamiento de la actividad huelguística de la CGT, marcando el inicio de una etapa fraccionamientos en el movimiento sindical y aislamiento respecto de otras fracciones sociales. Es importante tener en cuenta que el actamiento de las huelgas generales entre el 84 y el 89 fue menor al 50%.

4. La CGT Disidente estaba entonces integrada por: Camioneros, UTA, Peones de taxi, Aeronavegantes (AAA y APTA), Dragado y Balizamiento,

Palacios y Moyano) convoca ocho de las nueve huelgas del período, la CGT oficial (conducida por Daer)⁵ convoca sólo cinco huelgas y no asiste a ninguna movilización (Piva, 2006).

Ahora bien, coincidimos con estos análisis acerca de la importancia de considerar tanto las huelgas generales (Iñigo Carrera, 2010) como la conflictividad obrera general (Piva, 2006). Sin embargo, ninguno de estos dos indicadores resulta suficiente para aproximarnos al examen del papel del movimiento obrero organizado en la conformación de una coalición productivista que involucró a diversas clases, fracciones de clase, grupos y fac-

SMATA, UOM, UATRE, Molineros, fideeros, cerveceros, FOTIA, Ceramistas, papeleros, imprenteros, textiles, Farmacia, SADOJ, Judiciales, PAMI, etc. Y la CTA estaba integrada por: CTERA, ATE, CONADU, APA, SUTNA, Etc. La CGT disidente Moyano aglutina asalariados de la actividad productiva, aunque en una diversidad menor de ramas que la CGT Daer, con fuerte presencia de gremios del transporte (Iñigo Carrera y Donaire, 2002).

5. La CGT Oficial estaba entonces integrada por: Petroleros del Estado (SUPE), Trabajadores petroleros y del Gas privados (FASPyGP), FOETRA, Luz y Fuerza, Obras Sanitarias, Aguas Argentinas, UF y La Fraternidad, Químicos y Petroquímicos, UOCRA, Correos y telecomunicaciones, FAECYS, FATSÁ, UTHGRA, Alimentación, textiles (AOT), Marítimos, UPCN, SUTERH, Municipales, etc. Se caracterizaba por agrupar a los gremios de las ramas de la actividad económica donde se encuentran los capitales más concentrados y la mayoría de las empresas privatizadas (Iñigo Carrera y Donaire, 2002).

tores de poder. Para ello este trabajo propone incorporar el análisis de otras fuentes y registros (diarios, discursos en eventos públicos y políticos, debates legislativos, entre otros) que habiliten una aproximación sobre los modos de inscripción del movimiento obrero organizado en la matriz socio-política emergente, al mismo tiempo que un examen de los idearios y perspectivas de los nucleamientos obreros que se han puesto en juego en esta coyuntura crucial.

Este artículo busca reponer en el debate el papel del movimiento sindical en la coalición socio-política que comandó el proceso de salida de la crisis neoliberal y la posterior recomposición política e institucional, en clave neodesarrollista al mismo tiempo que nacional popular.

Es cierto que los sindicalistas de la CGT se subordinaron a la lógica devaluacionista impuesta por la fracción productiva exportadora del gran capital, reproduciendo de ese modo su rasgo de heteronomía en espacios informales de coordinación estratégica (el Grupo Productivo) gestados para instrumentar -desde arriba y de modo extra-legal- tanto la modificación de los términos de intercambio del comercio exterior (convertibilidad monetaria) como la reducción de los costos de producción (el salario). Sin embargo, deben considerarse y destacarse sus contribuciones fundamentales para la recomposición política e institucional.

En efecto, los sindicalistas de la CGT aportaron a la coalición neodesarrollista un conjunto de elementos que resultan centrales en la constitución de lo nacional popular: una perspectiva antineoliberal, una visión del trabajo como integrador social y del salario como dinamizador del mercado interno, una alianza interclasista necesaria para concretar la vocación hegemónica de la gran burguesía productiva exportadora, una vinculación orgánica con el peronismo y el sistema político y, finalmente, la posibilidad (o más bien la pretensión) de reencauzar de forma organizada la movilización social.

A continuación, se describe y caracteriza la perspectiva neodesarrollista y nacional popular, respectivamente. Luego se analizan las actuaciones del movimiento sindical, en particular la CGT, en el proceso de crisis neoliberal y salida del régimen de convertibilidad. Finalmente se reflexiona sobre la pertinencia de lo nacional popular como noción para comprender el proceso bajo estudio.

Neodesarrollismo

Para Feliz (2012), tanto en Brasil como en Argentina, a diferencia del proceso venezolano o boliviano, la crisis del programa neoliberal no permitió a los pueblos desplazar a las clases dominantes y sólo significó la superación dialéctica del neoliberalismo por un nuevo

proyecto con tendencia hegemónica, el neodesarrollismo, que busca convertirse en el eje orientador de una nueva modalidad de desarrollo capitalista en la periferia ¿En qué se diferencian el desarrollismo y el neodesarrollismo en Argentina?

El desarrollismo nació a mediados de los cuarenta como el proyecto de una incipiente burguesía industrial nacional ascendente. Forjó una alianza inestable con los trabajadores y generó un consenso alrededor de la industrialización como proceso articulador de cualquier programa de desarrollo nacional. De hecho fue hasta los años setenta fue el proyecto de las clases dominantes, momento en el cual el cambio de coyuntura internacional conmovió y desarticuló el modelo. A partir de entonces, se implantó de forma autoritaria una nueva estrategia: el neoliberalismo (Feliz, 2012). En el período 1964-1974 la expansión manufacturera se vio sustentada básicamente por la irrupción y acelerado ritmo de crecimiento de las actividades metalmeccánicas (complejo automotor, maquinaria eléctrica y no eléctrica), químicas y petroquímicas, con importantes transformaciones en el perfil productivo sectorial y los liderazgos empresariales (Azpiazu y Schorr, 2010).

Respecto del neodesarrollismo, hay que señalar que a partir del punto crítico de 2002 la industria reveló una expansión notable que involucró a la totalidad de las actividades fabriles y de

forma destacada la metalmeccánica, la producción de equipos y aparatos eléctricos en el enclave fueguino, la alimenticia y la química básica. No obstante, no se registraron cambios en el perfil productivo sectorial y los liderazgos empresariales no difieren demasiado del modelo que se consolidó durante los años noventa.

Asimismo, a diferencia del período 1964-1974, el crecimiento de la economía y la industria argentina no parece ser como entonces el eje dinamizador de la economía, ni vector ordenador y articulador de las relaciones económicas y sociopolíticas del país. Por el contrario, el esquema de tipo de cambio competitivo como rasgo preponderante de la política industrial contribuyó a profundizar la especialización primaria exportadora de la estructura productiva (Azpiazu y Schorr, 2010). Si bien en la actualidad y en consonancia con los valores desarrollistas de los sesenta, las expectativas respecto a las alternativas para el desarrollo nacional están colocadas en las capacidades estatales para garantizar la fórmula distributiva y en una clase capitalista nacional dispuesta a liderarlo; el hecho de que la preocupación esté casi exclusivamente concentrada en el problema de la competitividad internacional revela los límites del neodesarrollismo y sus contrastes con la experiencia del siglo XX. La centralidad de la competitividad internacional se traduce en la necesidad de ajuste cada vez que se comprueba

la incapacidad para competir, y en esto se halla la principal línea de continuidad con el neoliberalismo. Mientras que en la etapa expansiva esta lógica se expresa bajo demandas de moderación salarial y aumento de la productividad del trabajo, en tiempos de caída se traduce en exigencias de recorte de puestos de trabajo y de salarios, afirma Feliz (2012).

Por estos motivos, diversas investigaciones (Feliz, 2012; López 2012; Wainer, 2012, Cantamutto, 2012; Azpiazu y Schorr, 2010; Basualdo, 2011; entre otros) coinciden en que fue la fracción productiva del capital la que logró liderar el proceso de recomposición post-crisis. Pero a diferencia de la etapa desarrollista, han sido dominantes quienes se dedicaron a las actividades productoras de *commodities*, agro-industriales y extractivas. En particular, lograron mayor éxito en términos de valorización quienes mostraron capacidad de exportar, beneficiados con la sensible mejora de los términos de intercambio luego de la devaluación del peso.

En este punto es necesario hacer dos consideraciones. En primera instancia, no perder de vista la importancia que adquirió el capital transnacional en el bloque en el poder. Los análisis acuerdan en señalar no sólo fuertes signos de continuidades, sino de profundización de las tendencias hacia la extranjerización, transnacionalización y concentración del capital. Lo que determinó

que el capital nacional pierda terreno con respecto al capital extranjero. La tendencia más fuerte se observa en las ramas primarias, agroalimentarias y extractivas, dominadas por las grandes empresas transnacionales (López, 2012, Wainer 2012; Basualdo, 2011; Azpiazu y Schorr, 2010; Varesi, 2012; entre otros).⁶

En segundo lugar, debe subrayarse que las fracciones más débiles de la burguesía local también se vieron beneficiadas por la protección que les ofrecía el tipo de cambio alto, y fueron fundamentales a la hora de obtener los apoyos por fuera del bloque dominante. En efecto, mostraron ductilidad, destreza y capacidad de maniobra para relacionarse con los gobiernos y otros actores sociales con renovada potencia, en particular con los sindicatos, la iglesia, ciertos nucleamientos internos del partido justicialista, entre otras institucionalidades vinculadas a los factores de poder nacionales. La

6. Se trata de una fracción amplia compuesta por: terminales automotrices, empresas de hidrocarburos, mineras, diversos circuitos agro-industriales, empresas químicas y siderúrgicas. Estos sectores se caracterizaron por fuertes dinámicas de concentración, avance de la extranjerización, y participación decreciente de los asalariados en la apropiación del valor creado. Pero el capital financiero no perdió posiciones respecto del capital productivo-exportador, principal beneficiario del ciclo inflacionario. Pero la fracción financiera ocupa un lugar diferente al de los 90, como eje articulador del proceso de acumulación (Varesi, 2012).

implementación de un entramado de subsidios garantizaron acceso masivo al consumo sin afectar sustantivamente las ganancias para las empresas, lo que de forma creciente representó un serio problema para el presupuesto nacional (Bona, 2012).

La pérdida de una posición privilegiada por parte de la autoridad económica y monetario-financiera y el reforzamiento del predominio del poder ejecutivo sobre el legislativo y el judicial implicó mayor capacidad de arbitraje entre fracciones del capital y un proceso de subordinación del ala económica al ala política del poder ejecutivo (Bonnet y Piva, 2012).

Esto se vincula con una mutación más significativa: el pasaje de un tipo de arbitraje gubernamental neoliberal que se caracterizó por establecerse, “entre técnicos y políticos dentro de su propio gobierno para que estos últimos canalizaran políticamente la imposición de disciplinamiento de mercado por parte de los primeros” (Bonnet y Piva, 2012: 14) ya que la unidad entre fracciones de la burguesía estaba garantizada de antemano por el disciplinamiento monetario impuesto por la convertibilidad; hacia un tipo de arbitraje populista. La etapa neodesarrollista requirió entonces un tipo de arbitraje diferente, capaz de mediar entre las fracciones sociales integrantes del bloque en el poder. Esto se tradujo en una repolitización de la intervención del estado y un reforzamiento del

presidencialismo, al menos hasta el año 2008 (Bonnet y Piva, 2012).

En suma, la etapa neodesarrollista se distingue por:

- Expansión industrial especializada: agroindustria y *commodities* fabriles
- Preeminencia de la gran burguesía productiva exportadora
- Profundización de la extranjerización, transnacionalización y concentración del capital
- Preocupación prioritaria por la competitividad internacional
- Puja distributiva condicionada por demandas de mayor productividad laboral
- Arbitraje gubernamental “populista”, capacidad del poder ejecutivo de mediar entre demandas de diferentes fracciones de clase.

Lo nacional popular

Durante la primera década del siglo XXI la región experimentó un cambio de época marcado por la desnaturalización de la asociación entre globalización y neoliberalismo, pero de carácter ambivalente, donde se entrecruzan tendencias de ruptura con el modelo excluyente con tentativas de reconstrucción de gobernabilidad neoconservadora (Svampa, 2010). Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Argentina ilustran con distintos matices los alcances de este proceso. Según Vilas (2005), estos proyectos políticos

tienen algunos puntos en común con las experiencias nacional-populares del siglo XX: son el resultado de amplias convergencias político-sociales que articulan la movilización popular y el recurso periódico a procedimientos electorales, sus convocatorias evocan intereses nacionales generales y no sólo sectoriales; se caracterizan por practicar cierta revalorización del Estado como principio organizador y articulador de la pluralidad social y legitiman su intervención en determinados aspectos de la economía.

Ahora bien, resulta bastante usual en los análisis confundir los rasgos de la matriz nacional popular con aquellas conceptualizaciones del marxismo clásico referidas al bonapartismo o cesarismo. El ensayista boliviano Zabaleta Mercado (2006) distinguió estas categorías para especificar las formas que asume la autonomía relativa del estado en el caso latinoamericano. El bonapartismo se caracteriza por constituir una solución precaria a una situación de inmovilidad producida por una situación de empate. Si nadie puede imponerse, se designa a un tercero que no es parte del empate. Es un modo peculiar de ajuste entre el Estado y la sociedad civil, cuando ambos entraron en una relación de no correspondencia o no conformidad que requiere un arreglo inminente. Lo importante del bonapartismo es su base social específica: masas no autorrepresentables y dispersas. Lo central es que la noción

bonapartismo hace referencia a procesos centrados en el carácter no representable de las masas (los campesinos franceses que Marx compara con una bolsa de papas).

En cambio, ¿A qué relaciones y procesos se refiere el populismo? En otras palabras ¿Cómo se distingue del bonapartismo? Lo característico del populismo es la emergencia de una totalización (pueblo) que debe considerarse antes y por encima de las categorías sociales que lo componen, como clase social o etnia: “En los hechos, si la connotación básica del populismo es la subsunción del dato clasista en lo popular como masa congregada, entonces es una modalidad sin duda no incompatible con la lógica del bonapartismo” (Zavaleta Mercado, 2006: 43). ¿Por qué motivos? Tanto el bonapartismo como el populismo se orientan hacia un reconocimiento de las clases a través de la identidad de cada una de ellas con el estado, de lo cual se deduce la aparición en el seno de estos modelos del corporativismo. Sin embargo, hay un rasgo que distingue al populismo -en particular en el caso del MIR boliviano en 1952:

“... aquí la masa se constituye al margen y aun en contra del Estado, se apodera de la iniciativa y en muchos casos rebasa o desordena el marco estatal. Esto hace una diferencia importante con el bonapartismo que, por su carácter, asigna la iniciativa en profundidad a la culminación concentrada

del poder. En el bonapartismo, las masas están a merced del poder; en el populismo, el poder está a merced de las masas” (Zavaleta Mercado, 2006: 44)

¿Pueden auto-representarse las masas en el populismo? Según De Ipola y Portantiero (1994), en la experiencia latinoamericana lo nacional popular, en tanto forma particular de compromiso estatal, se confronta con el nivel de las demandas, valores y tradiciones nacional-populares. Esta confrontación involucra dos principios centrales de agregación: uno dominado, nacional-popular, que expresa las demandas y tradiciones nacional-populares. Y otro dominante, nacional-estatal, que captura en una forma estatal dichas demandas mediante un movimiento de nacionalización y ciudadanización de las masas, englobando y superando ilusoriamente las parcialidades sociales. Mediante esta operatoria, los conflictos no son anulados, sino fragmentados por una lógica corporativa. Entonces, el Estado opera reconciliando intereses privados diversos: “La eficacia de esta apariencia deriva del hecho de que, para la vida cotidiana, ella es no sólo descriptiva sino también prescriptiva” (De Ipola y Portantiero, 1994: 527).

La tensión que se suscita entre estos dos principios —el popular y el estatal— se vincula con una matriz ideológica estatalista. A diferencia de la matriz societaria, asentada en la tradición socialista europea que supone que “frente

a un Estado cerrado a la participación, la presencia de las masas en él sólo podría estar garantizada por la irrupción, fuera ella molecular o violenta de la sociedad” (Portantiero, 1991: 156); la matriz estatalista, en cambio, implica una visión antropomorfa del Estado y una tradición paternalista ligada a la elaboración “desde arriba” de lo nacional popular, una articulación de masas con centralidad estatal que históricamente se ubica en la etapa de industrialización y urbanización que transformó a América Latina con posteridad a la crisis de 1930 (Portantiero, 1991).

En efecto, esto se había concretado en las fases de compromiso estatal nacional-popular fusionando demandas populares con nación y ciudadanía en un único movimiento. Una elaboración desde arriba que combinó articulación política de masas con centralidad estatal (Portantiero, 1991). En la medida que el proceso de industrialización no habilitaba a ninguna fracción dominante asegurar por sí sola el control político de ese tránsito, la hegemonía debió ser producto de un compromiso entre clases. Sin embargo, es necesario plantear algunos matices. Según Portantiero (1987 y 1991) y De Ipola y Portantiero (1994) la balanza se inclinaría hacia la matriz estatalista casi como una fatalidad de lo nacional popular. El ensayista boliviano Zavaleta Mercado (1986), en cambio, se detiene a examinar los complejos vínculos entre societario y estatalismo, y sus múltiples posibilidades:

“Es verdad que la nación maniquea estatalista es tan falaz como una idea societaria o autonomista o populista de la dirección de la política. El estado puede, en rigor, tener una determinación más nacional popular o si se quiere más societaria, enfrentando a sectores menos democráticos de la sociedad (y en los hechos, el estado ha estado más de una vez por delante de la sociedad) y, sin duda, por cuanto aquí se siente más el principio de la centralización, puede encarnar lo nacional contra sectores antinacionales de la sociedad. La sociedad civil, a su turno, puede tener un grado importante de prolongación hacia el estado” (Zavaleta Mercado, 1986: 59)

Aboy Carles (2005) también matiza los argumentos de De Ipola y Portantiero. En sintonía con las contribuciones de Zavaleta alerta sobre las interpretaciones de lo nacional-popular basadas en la acentuación de uno de los dos aspectos. Ambos, afirma, son constitutivos de este fenómeno. Uno y otro énfasis han oscurecido su complejidad, mucho más cercana a una gestión precaria e inestable situada entre la ruptura y el orden social. Desde esta perspectiva, lo nacional-popular se constituye en la tensión entre estrategias de ruptura y de integración de una comunidad política. Se trata de un mecanismo específico de construcción y negociación de las tensiones que atraviesan a una identidad política. A veces de forma simultánea, a veces de forma alternativa, incluye y excluye a sus adversarios en su propio campo de

representación, ocasionando un juego inestable de inclusiones y exclusiones, sin definirse en u otro polo. Así reinstala y afirma, una y otra, vez su ruptura fundacional, al tiempo que borra su propio origen y despliega su hegemonismo. Lo específico del populismo es, entonces, su capacidad de gestionar ambas tendencias, y no sólo una de ellas. Es un juego pendular inagotable, afirma.

De ahí la fragilidad e inestabilidad congénita que caracteriza a estas experiencias, aspectos sobre los cuales reflexionan Martuccelli y Svampa (1999), quienes comprenden a lo nacional popular como un triángulo, cuyos vértices designan tanto sus elementos constitutivos como sus condiciones de posibilidad:

a) Estilo político encarnado en un líder con presencia protagónica, que para sobrevivir requiere de la amenaza constante de un enemigo;

b) Tipo de intervención económica dirigido a la consolidación del mercado interno, que entra en crisis al quedar al descubierto los límites de su capacidad redistributiva. La misma realidad económica que hace posible la emergencia del populismo termina sellando la fractura del pacto social y;

c) Un tipo de vinculación orgánica entre sindicatos y sistema político que apunta a la participación organizada de los primeros.

El modelo será producto de una articulación exitosa entre estos tres ele-

mentos, que no existen sino a través de sus articulaciones recíprocas. La debilidad propia de cada elemento es lo que impulsa la permanente búsqueda de mutua articulación.

En suma, la emergencia de fuertes liderazgos que eclipsaron las contradicciones entre las clases que integraron los pactos de poder así como la inestabilidad de estas alianzas constituye un testimonio de la fragilidad de las experiencias populistas y revela que la vaguedad e indeterminación de la ideología populista se encuentra inscripta en la misma realidad social que la produce.

Portantiero (1987) sostiene que el sindicalismo de masas como grupo de presión al interior del sistema político fue el instrumento peculiar a través del cual se constituyeron como sujetos colectivos de acción política las clases populares, abandonando así su externalidad con relación al estado al identificarse con los movimientos nacional-populares. Aunque; “por más heterónimo que aparezca su comportamiento en términos de un modelo clásico de constitución, la presencia política de las clases populares estuvo mediada por instancias organizativas “de clase” y no por una pura vinculación emotiva con un liderazgo personal” (Portantiero, 1987: 166).

Sigal y Torre (1994) también analizaron la emergencia en América Latina de un sindicalismo de corte

político que fue estimulado tanto por los rasgos de los mercados de trabajo como por la importancia económica y política de los Estados en la región. En consecuencia, las relaciones laborales estuvieron reguladas de forma predominante por vía legislativa más que por negociación directa entre trabajadores y patronales, dando lugar a una fuerte tutela estatal del sindicalismo. Lo interesante de este punto de vista es la consideración de la heteronomía obrera en relación con los líderes populistas no sólo como un efecto de las exigencias políticas de las élites dirigentes –perspectiva que concibe a los trabajadores como una masa disponible para cualquier maniobra desde arriba-. En otras palabras, se analiza la heteronomía de los actores subalternos de los populismos latinoamericanos desde un ángulo que permite tomar en cuenta el grado de separación entre los dos planos de la experiencia de las clases populares: a) la movilización que apunta a la ampliación del sistema político, y que se efectúa con independencia de: b) las oposiciones de clases del mundo de la producción. Como resultado de este fenómeno, sostienen Sigal y Torre, se origina una disyunción de los antagonismos: entre uno y otro campo de acción de las masas populares (la plaza pública y la fábrica) que con frecuencia se traduce en alianzas y en luchas “anti-oligárquicas” entre fuerzas sociales opuestas en el terreno de las

luchas económicas. La convalidación de la devaluación en 2002 por parte de las dos CGT puede ser comprendida desde este ángulo.

La disociación entre luchas económicas y luchas políticas plantea una autonomía relativa entre estas dos dimensiones (económica y la política) que ha conducido, en último término, a los trabajadores a organizarse en nombre de su condición obrera en sindicatos, y por otra parte, en tanto masa popular excluida del sistema político, a participar de coaliciones sociopolíticas más amplias. A esto Sigal y Torre lo denominan sindicalismo populista. El sindicalismo populista presenta una ambigüedad inherente a su doble condición de institucionalización ligada al Estado y de organización de defensa de los trabajadores. Pero si bien la institucionalización otorgó poderes amplios y autoritarios a los estados sobre las organizaciones de trabajadores, es innegable el papel de actor político asumido por el sindicalismo. Resulta problemático considerarlo como mera extensión o correa de transmisión del aparato estatal. Es que los sindicatos pueden ser sucesivamente: aparatos de estado, órganos de mediación o estructuras contra hegemónicas (Zavaleta Mercado, 1986), y esta versatilidad se encuentra íntimamente relacionada con las formas en que las clases populares se vinculan con los grupos dominantes y con el estado en cada contexto nacional e histórico.

Confluencias entre sindicalistas y empresarios

La modificación de la política cambiaria de Brasil en 1999 desencadenó en Argentina tensiones y enfrentamientos interburgueses. Por una parte, se desarrolló una tendencia a favor de la imposición de políticas devaluacionistas para ponerle fin a la convertibilidad. Por la otra, se observaron reorientaciones en las estrategias de distintas fracciones burguesas en relación con la integración regional. De hecho, la devaluación del real produjo una crisis en el MERCOSUR y profundizó el desequilibrio entre industrias de ambos países.⁷ Los principales sectores económicos vinculados al intercambio comercial con Brasil comenzaron a sufrir los efectos y rápidamente cayeron las exportaciones. Se produjo al mismo tiempo

7. Según Julián Kan (2009), la relevancia de momento para entender la crisis local radica en la fuerte conexión entre la economía brasilera y la argentina, que se dio a partir de la sanción del Plan Real en 1994 y el gran crecimiento del intercambio comercial con la puesta en vigencia, en 1995, del Arancel Externo Común (AEC) en el MERCOSUR. Hacia fines de 1998 las exportaciones a Brasil representaban el 30% del total de las exportaciones argentinas (casi 8 mil millones anuales), mientras que el 23% del total de las importaciones argentinas provenían de Brasil (7 mil millones anuales). Esto explica el fuerte impacto local que tuvo la devaluación del real en 1999, profundizando los efectos recesivos arrastrados por las crisis asiática y rusa y, a partir de 1997, una caída en los precios internacionales de los *commodities*.

una avalancha de productos brasileros al país, y la consecuente caída de la inversión y del empleo (suspensiones, bajas de salarios, etc.) en las ramas de alimentación, metalmecánica, plástico, siderurgia, tejidos, papel, cartón, neumáticos, entre otras (Kan, 2009).

Visto desde el ángulo de los grupos dominantes, la devaluación del real marcó el quiebre de la unidad entre las fracciones burguesas y la crisis de la hegemonía neoliberal. Desde ese momento la disputa se congregó en dos espacios, resultado de la ruptura del “Grupo de los 8”. En este grupo se aglutinaron a partir de entonces los defensores de la convertibilidad, integrados por el sector de las finanzas (los bancos y la bolsa) así como por intereses de los grandes exportadores e importadores de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Las entidades que se retiraron impulsaron la formación de nuevos alineamientos como el “Grupo Productivo”⁸, de gran resonancia en la agenda de la crisis de 2001, pero con alta inestabilidad en la relación entre sus integrantes. Entre agosto de 1999 y principios de 2002 (momento de su disolución), el Grupo productivo –bajo el liderazgo de la UIA– se expresó mediáticamente, y marcó agenda en las conferencias industriales anuales, en una fuerte propaganda alrededor del “compre nacional” y del reclamo de

8. Estaba compuesto por la UIA, CAC (Construcción), UAC, CRA.

protección para la industria local (modificación del tipo de cambio), aunque sin hablar de devaluación abiertamente hasta fines de 2001 (Kan, 2009).

¿Cómo intervinieron las organizaciones sindicales en este proceso de reorganización de alianzas y disputas? Los vínculos entre el Grupo Productivo y sindicatos fueron muy fluidos, pero ambivalentes. Los intercambios entre ambos sectores se iniciaron a fines de 1999, en el marco de fuertes protestas del gremio camionero por el impuesto sobre los automotores (La Nación, 12/04/2000).

En este contexto defensivo y de resistencia frente a la ofensiva neoconservadora, algunos actores del trabajo mostraron contar con mayores recursos a la hora de emprender medidas de fuerza o protagonizar luchas. Badaró (2003) señala que el dirigente camionero Hugo Moyano venía impulsando desde 1996 acciones contra la “competencia desleal” y en defensa del trabajo de los “camioneros argentinos”. La devaluación del real agudizó la problemática del sector y se expresó en una presencia fuerte de camioneros brasileros y chilenos en el país.

Paralelamente a estas acciones de carácter sectorial, tanto el nucleamiento sindical conducido por Hugo Moyano y Juan Manuel Palacios (el MTA) como otros sectores del movimiento sindical nacional (CTA y CCC), comenzaron a hacerse eco de un conjunto de demandas más amplias vinculadas al trabajo,

la producción, la pauperización y la inadecuación del esquema de la convertibilidad para superar la profunda recesión económica.

En enero del 2000, Hugo Moyano manifestaba su desacuerdo con el modelo de convertibilidad cambiaria, mucho antes que los propios empresarios de la industria mencionaran de forma explícita entre sus demandas la posibilidad de una devaluación (Hugo Moyano, Página 12, 17/01/2000).⁹ Además, a lo largo de ese año los empresarios industriales enrolados en el Grupo Productivo mantuvieron numerosas reuniones con los sindicalistas. Los encuentros se realizaron casi invariablemente en la sede de la entidad industrial. Las propuestas con las cuales el Grupo Productivo consiguió el apoyo de las organizaciones gremiales fueron: producir un shock de reactivación del mercado interno, subsidiar a los jefes de familia desempleados y socorrer financieramente a las pequeñas y medianas empresas. Estas propuestas fueron puntualizadas en un documento que contó con el apoyo total por parte de la CGT Oficial. Los dirigentes sindicales que participaron asiduamente de estos encuentros fueron Rodolfo Daer del gremio de Alimentación, Carlos West Ocampo de Sanidad, Andrés Rodríguez de UPCN, Armando Cavallieri de Comercio, entre otros (La

9. Schurman, Diego, *Página 12*, 17 de enero del 2000 [15/8/2014]

Nación, 09/07/2000; 10/07/2000 y 13/07/2000).¹⁰

Durante 2001 empresarios y sindicatos profundizaron su acercamiento. Coincidieron en la promoción de un conjunto de medidas para reactivar el sector productivo y atender el desempleo. A las reuniones con los empresarios se sumaron, aunque de forma intermitente, Moyano, Palacios, Piumato y Ubaldini, todos ellos del sector disidente de la CGT. Según el dirigente de la UIA, De Mendiguren, los sindicalistas: “Coincidieron en la imperiosa necesidad de discutir un proyecto nacional que permita integrar a la sociedad argentina a integrar a su vez al país en el mundo” (La Nación, 27/08/2001).¹¹ La confluencia de intereses entre empresarios y sindicalistas (y sumado a éstos un nutrido grupo de dirigentes políticos del PJ) abarcaron también consensos respecto a la necesidad de reprogramar la deuda externa, debido a la imposibilidad de su pago (La Nación, 19/09/2001).¹²

En otras palabras, en un contexto de

10. “Las claves de lo que viene” - 09.07.2000 - lanacion.com [15/8/2014]; “La agenda de la semana” - 10.07.2000 - lanacion.com [15/8/2014]; “La CGT apoya al GP” - 13.07.2000 - lanacion.com [15/8/2014]

11. “Las CGT y la UIA señalaron la necesidad de reactivar el sector productivo” - lanacion.com [15/8/2014]

12. “El PJ, la UIA y las dos CGT señalaron la necesidad de reprogramar la deuda externa” - lanacion.com [15/8/2014]

profunda crisis afloraron solidaridades endebles pero urgentes, conforme se iban debilitando las posiciones de los distintos sectores sociales como consecuencia de la profundización del cuadro recesivo. No sólo los empresarios se acercaron a los sindicalistas, sino que los sindicalistas que permanecían enfrentados entre sí se vieron envueltos en un proceso de unificación. La fractura formal de la CGT se había consumado por fuertes divergencias en torno a la sanción de la reforma laboral en el 2000, debido a las denuncias de sobornos a los senadores nacionales. Pero poco más de un año después de la ruptura, tanto los referentes de la CGT oficial como los de la CGT disidente plantearon públicamente su vocación de reunificación hacia septiembre de 2001 (Página 12, 01/09/2001; Revista Mercado, 25/09/2001).¹³

En noviembre de 2001 el acercamiento entre la CGT y el Grupo Pro-

13. Daer y Moyano convocaron un plan de lucha para la segunda quincena de octubre, con cortes a los accesos a capital y toma de ministerios. Se prevé la realización de un plenario de las dos CGT en pos de lograr la unidad sindical. Daer y Moyano anuncian unificación de la CGT y elección de una conducción única y convocan un plenario de delegados. Tanto Daer como Moyano asisten a un acto de homenaje a Rucci y declaran en medios de comunicación que la CGT ya está unida, solo falta ponerle fecha. Revista Mercado, 25/09/2001, en <http://www.mercado.com.ar/notas/economia-y-politica/16791/inminente-unificacion-de-las-dos-cgt> [15/8/2014]

ductivo fue mayor. Es sabido que la convocatoria para una concertación con empresarios, sindicalistas e iglesia lanzada por el gobierno de De La Rúa no dio resultados. Tanto la UIA como la CGT Oficial solicitaron una postergación de las reuniones, que fue concedida por una administración ávida por sumar apoyos y que ya mostraba signos de una vulnerabilidad mayúscula. La UIA se limitó a enviar un documento dirigido al ejecutivo que contó con el respaldo de todo el Grupo Productivo, CRA, CAC, las dos CGT y ABA. Sin embargo, el jefe de la CGT oficial, Rodolfo Daer, que había adherido al pedido de la UIA de postergar la reunión, marcó entonces una ligera distancia con los empresarios al ratificar su compromiso con la convocatoria a la concertación. El fin era asegurar los recursos que evitasen el recorte en los aguinaldos y asignaciones familiares del presupuesto 2002. La fracción disidente de la CGT, en cambio, mostró una actitud oscilante respecto a su participación en la mesa de consensos (La Nación, 28/11/2001).¹⁴

Un buen indicador de la intensidad que estaba adquiriendo la alianza entre industriales y trabajadores es la presencia de los dirigentes Rodolfo Daer y Hugo Moyano en la 7ma Conferencia Industrial de la Argentina, realizada en Parque Norte (Buenos Aires) entre

14. "Compás de espera para la concertación", 28.11.2001 - lanacion.com, [15/8/2014]

el 20 y el 22 de noviembre de 2001. Con el título "*Encuentro de los Argentinos: Un Proyecto Nacional para el desarrollo. El verdadero riesgo es no tener país*", un grupo tan numeroso como heterogéneo fue convocado por la UIA para debatir las alternativas a la crisis.

La "agenda de temas" puede sintetizarse en dos grandes temas: 1) "Mejorar la competitividad", mejorar el tipo de cambio, establecer aranceles y reembolsos, corregir distorsiones en los precios y tarifas y 2) "El mercado interno como herramienta de crecimiento y el capital como herramienta del desarrollo", a través de la baja de tarifas y el crecimiento de las exportaciones que impulsará el crecimiento de la producción nacional. Pero además con mayor gasto social e infraestructura, que provocarán crecimiento de la demanda y oferta. La reestructuración de la deuda pública resulta central para liberal recursos fiscales y financiar adecuadamente al sector privado.¹⁵

¿Se estaba gestando un nuevo programa económico? No caben dudas que en la mente de más de un dirigente empresario esto estaba en efecto teniendo lugar. Ahora bien, junto con las políticas de reactivación y dinamización económica en clave neodesarrollista, se imponía una necesaria recomposición político institucional. De ahí la creciente importancia adquirida por el elemento nacional popular en el

15. Fuente: Unión Industrial Argentina (UIA)

nuevo modelo de desarrollo, encarnada por los dirigentes obreros.

Cuando se examinan las intervenciones de Daer y Moyano en La Conferencia convocada por la UIA es posible advertir que los acercamientos con los empresarios no se limitaron a una coincidencia de tipo táctica o coyuntural. Los dirigentes sindicales compartían con los industriales y muchos de los políticos e intelectuales y especialistas presentes en la Conferencia un conjunto de valores e ideas sobre la producción y el trabajo, y la relación entre ambos. Cooperación entre capital y trabajo para una mayor productividad, dinamización industrial, impulso a la exportación de bienes con "valor agregado", fomento del empleo y el consumo, y recuperación de las capacidades estatales para el control de las variables macroeconómicas y sociales.

Rodolfo Daer destacó en su exposición las charlas permanentes entre la CGT y el Grupo Productivo. Sus argumentos permiten arribar a una conceptualización de la crisis a tono con el discurso empresario de esa coyuntura:

"Creemos desde la CGT que estamos en un punto de inflexión donde no existe como antecedente contrato social; no existe el contrato social porque no hay empleo; no hay empleo porque no hay producción; no hay producción porque no hay consumo; no hay consumo porque no existe dinero, porque hay ocho millones de personas que están

fuera del mercado laboral, porque los salarios son de \$300, \$400, porque se inició una rebaja del salario del sector público que ahora repercute en el sector privado. Pero yo creo que tenemos un primer consenso en el mundo del trabajo. Todos estamos mal, los trabajadores y los empleadores, ¿hay alguien que tiene la excepción de haber ganado en todo este proceso en nuestro país?” (Rodolfo Daer en la 7ma Conferencia Industrial Argentina, noviembre de 2001)

Para Daer la salida de la crisis requería fundamentalmente de desarrollo industrial y una fuerte intervención estatal como eje organizador de las relaciones sociales. Para que esto sea posible era necesaria una concertación: “consagrar en la Argentina un gran acuerdo económico social”.

La intervención de Hugo Moyano compartió con la de Daer y con la de los empresarios en general un tono productivista, de revalorización del trabajo y la producción. Pero a diferencia de éstos, Moyano colocó en el debate y con un sentido crítico el patrón de acumulación neoliberal y sus implicancias para explicar la crisis:

“Porque hace algunos años, creo que nos llevaron a todos los argentinos, a todos en general, a todos nos confundieron. Confundieron a los empresarios, cuando les dijeron: ustedes no están actualizados, ustedes no se han modernizado, ustedes no pueden competir con el mundo (...) También confundieron a la clase política. Uno muchas veces

escucha hablar a un hombre que viene del campo nacional y popular y no sabe si está hablando un liberal o un... A nosotros los dirigentes gremiales nos confundieron de tal forma, que muchos creían o no sabían si tenían que administrar su AFJP, si tenían que administrar su ART o si tenían que administrar una porción de la empresa privatizada que le había quedado a la organización gremial” (Hugo Moyano en la 7ma Conferencia Industrial Argentina, noviembre de 2001)

En esta intervención Hugo Moyano puso de relieve la transformación experimentada por el movimiento sindical en los años inmediatamente previos. Específicamente, apuntó a cuestionar el modelo de sindicalismo adaptativo empresarial, involucrado en los negocios surgidos a partir de los procesos de desregulación, privatización y reforma de estado. Sin embargo, en sus argumentos dejó entrever que él como dirigente y las entidades a las que se encontraba vinculado como representante también habrían sido parte de la “confusión”.

Nos detenemos en este punto porque deja al descubierto uno de los rasgos más significativos del liderazgo del camionero y del sector disidente que encarnaba. Nos referimos a la doble inscripción del núcleo moyanista en las figuras sindicales emergentes durante la vigencia de la convertibilidad: la del sindicalismo adaptativo empresarial y la del sindicalismo resistente que, en un contexto alta desocupación

y de aguda debilidad organizativa, optó por desplegar un conjunto de acciones de carácter testimonial haciendo parte en frentes multisectoriales. Esa doble inscripción en dos vertientes diferenciadas y enfrentadas configuró un estilo de liderazgo peculiar y paradójico, que colocó a este nucleamiento sindical en una posición de ventaja en relación con los otros nucleamientos existentes. En términos político-ideológicos, el sector disidente de la CGT encarnaba al mismo tiempo el ideario productivista, fundado en la colaboración jerarquizada entre clases, promovido en conjunto con los empresarios; y el antineoliberal, de resistencia al disciplinamiento socio-laboral, revalorización del trabajo y del estado como vertebradores de la nación, y de la “justicia social” como horizonte de la transformación societal.

*

Diciembre de 2001 se inició con el “corralito”, la fuga de depósitos y protestas de los ahorristas. Las medidas de gobierno concitaron un amplio rechazo social y político. Industriales, banqueros y sindicalistas elaboraron un comunicado conjunto “*Cualquier crisis puede ser superada con el respaldo de la nación unida*” firmado por el Grupo Productivo y la CGT oficial. Se autodenominaban “Núcleo Nacional” y reclamaban: “una profunda unidad de todos los sectores representativos de la

sociedad tras las medidas que permitan recuperar demanda y competitividad, y así modificar las expectativas para recrear un escenario de mayor tranquilidad social, financiera y productiva” (La Nación, 01/12/2001). Frente a la inminente debacle social, Daer afirmó: “el peronismo no tiene todavía una alternativa. Mientras que el PJ no amalgame ninguna propuesta superadora va a estar De La Rúa firme. Ningún sector político ofrece una alternativa diferente, excepto lo que propone el Grupo Productivo y la CGT, que es modificar la política económica”. En las mismas declaraciones acusó la política pro dolarización del ministro de economía y se mostró nuevamente a favor de una concertación, un “Acuerdo económico y social”, y en contra de la devaluación, marcando de este modo cierta distancia con los empresarios (La Nación, 03/12/2001).

Ahora bien, mientras que la CGT Oficial se reunió con el Jefe de Gabinete, no convocó medidas de fuerzas —mostrando de este modo su permeabilidad de cara a la convocatoria del gobierno para lograr una concertación social— y participó asimismo en una reunión con la delegación del FMI junto a referentes del Grupo Productivo y la Asociación de bancos; la CGT Disidente, en cambio, no asistió a estos encuentros y reveló una mayor capacidad de movilización. Moyano convocó un plenario de delegados regionales en la UTA

y movilizaciones en todo el país en contra de las medidas anunciadas por el gobierno, en conjunto con la CTA y la CCC.

En los días que siguieron, mientras las tres centrales sindicales convocaron un paro general para el 13 de diciembre, el Grupo Productivo (UIA, CRA, CAC) junto a las dos CGT firmaron de conjunto un manifiesto en contra de la eliminación del peso con la consigna *La dolarización es una falsa medicina*: “La dolarización no contribuiría a resolver los problemas que presenta el actual escenario de caída de las empresas, de deterioro del salario real, de altas tarifas de servicios y elevadas tasas de interés, en definitiva, de alta pérdida de competitividad” (La Nación, 09/12/2001).¹⁶

En el manifiesto convivían nociones que usualmente pueden considerarse excluyentes entre sí o que integran universos de sentido bien diferentes: “caída de la competitividad”, “altas tasas de interés” –ligadas a la rentabilidad empresaria– junto a “deterioro del salario real”, “altas tarifas de servicios” –que refieren reivindicaciones laborales y populares. Se revela la convergencia de intereses en principio contrapuestos pero que en esa coyuntura se tornaron compatibles, al menos desde el punto de vista productivista en gestación.

16. “Empresarios y gremialistas piden frenar el proceso de dolarización”, 09.12.2001, lanacion.com [15/8/2014]

Luego de las jornadas de movilización y lucha social del 19 y 20 de diciembre de 2001 que concluyeron con la renuncia del presidente de la Nación Fernando De La Rúa, el 23 de diciembre asumió Rodríguez Saa. El presidente provisional anunció la cesación de pagos de la deuda externa, la creación de una tercera moneda “el Argentino”, la continuidad de la convertibilidad, la creación de un millón de puestos de trabajo y la reducción del gasto político. Enseguida recibió a los sindicalistas Rodolfo Daer, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, quienes le ofrecieron un respaldo cerrado. A continuación recibió al Grupo Productivo, a las Madres de Plaza de Mayo y a los líderes piqueteros D’Elía y Alderete (La Nación, 31/12/2001).¹⁷

El 26 de diciembre Rodríguez Saa visitó la CGT. Anunció la derogación de la Ley laboral, la devolución del 13% descontado a jubilados y topes para las jubilaciones de privilegios. En esta ocasión se visibilizó que el proceso de acercamiento entre las dos fracciones de la CGT se estaba consolidando. En un acto realizado en la sede de Azopardo de la entidad confederal, Rodolfo Daer, Hugo Moyano y Saúl Ubaldini, frente a un público que reclamaba por la unidad de la CGT, manifestaron de conjunto su apoyo al presidente provisional Adolfo Rodríguez Saa, presente

17. “Una breve y vertiginosa gestión de siete días”, lanacion.com [15/8/2014]

en dicho acto. Reclamaban el fin de las políticas de ajuste, la defensa de la salud pública y de los convenios colectivos de trabajo, y la implementación de una política con eje en el aparato productivo para recuperar el empleo y combatir la pobreza.¹⁸ Pero presiones de diversa naturaleza, en particular la quita del apoyo por parte de los gobernadores provinciales, llevaron al puntano a presentar la renuncia a la presidencia el 30 de diciembre. En su lugar asumió Eduardo Duhalde, hombre fuerte del PJ, figura clave y ejecutor de la devaluación asimétrica en enero de 2002.¹⁹ No obstante, el pliego de una CGT en proceso de resucitación ya estaba instalado.

Reposicionamiento de la CGT en el gobierno de Duhalde

Durante el gobierno de Duhalde quedó consolidada la alianza con el sector

18. Fuente: archivo audiovisual, se agradece a Hugo Marviggiano la autorización para citar su grabación casera, realizada como asistente del acto.

19. Para Azpiazu y Schorr (2010), la “salida devaluatoria” contó con un amplio respaldo social a partir de la conformación de una alianza heterogénea entre diversos sectores empresarios, políticos, académicos, sindicales, que se estructuró en lo ideológico discursivo alrededor de la defensa de categorías caras a la historia del movimiento popular en argentina: industria, producción y trabajo, burguesía nacional, nación.

productivo. El presidente de la UIA y caudillo de los industriales, Ignacio De Mendiguren, fue designado ministro de producción. Pero desde marzo de 2002, la alianza entre el gobierno y la CGT de Daer comenzará a resquebrajarse. A partir de entonces, la agenda de los denominados “gordos” será cada vez más coincidente con la de la CGT Disidente: centralmente derogación de la Reforma Laboral, devolución del 13% a los estatales, aumento salarial, rechazo a las políticas del FMI, entre otras. Pero a diferencia de ésta, el reclamo principal no será la Convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, sino a un “Consejo Económico y Social”. La negativa del gobierno de Duhalde a aumentar los salarios, agudizó las diferencias y desmejoró aun más sus vínculos con las centrales sindicales.

Las tensiones con el gobierno parecieron resolverse a favor de los sindicalistas. En efecto, en abril se realizaron varios cambios en el gabinete del poder ejecutivo. Con el cambio de ministros la CGT Daer amplió su presencia en el gobierno. Alfredo Atanasof fue nombrado Jefe de Gabinete, y Graciela Camaño, esposa del dirigente gastronómico Barrionuevo, como Ministra de Trabajo. De este modo quedó de manifiesto que la CGT Oficial se había convertido en uno de los pocos respaldos con los que contaba el presidente Duhalde. Mientras tanto, el nuevo ministro de economía, Lavagna, se apoyó en los sindicalistas para poner límites

al plan propuesto por la UIA que contemplaba suspensiones y reducciones salariales. En este contexto, las diferencias entre las dos CGT, una vez más, se acrecentaron. Una acompañaba al gobierno y acotaba su reclamo al aumento salarial; la otra, se unió a la CTA y permaneció en estado de movilización (Iñigo Carrera y Donaire, 2002).

Ahora bien, si bien durante esta administración se estableció un nuevo esquema macroeconómico que sentó las bases para la concreción del programa neodesarrollista, no se logró superar la crisis política y recomponer la hegemonía sobre bases sólidas. De hecho, la alianza de Duhalde con la CGT “Oficial” (en especial con los “gordos” y “barriónuevistas”) y las 62 Organizaciones peronistas sellada con los nombramientos de sindicalistas, no dio los frutos esperados y reveló rápidamente la incapacidad de este sector del movimiento obrero para contener el conflicto social y organizar la movilización.

Es que la CGT Disidente no cesará en sus reclamos y junto a la CTA y amplios movimientos sociales, continuará en estado de movilización permanente. Tampoco asistirá a las convocatorias de la concertación convocadas por el gobierno. Finalmente, la política de criminalización de las luchas sociales y la represión desproporcionada sobre los movimientos de desocupados que concluyó con el asesinato de dos jóvenes piqueteros, Maximiliano Kosteki y Dario Santillán, el 26 de junio de 2002

en la ciudad de Avellaneda, precipitaron la salida del presidente provisional.

En conclusión, tanto la necesaria renovación del elenco político posterior a la represión de diciembre de 2001 y a la masacre de Avellaneda en junio de 2002, como la impopularidad de aquellas figuras que el imaginario social referenciaba con el neoliberalismo, alcanzaron asimismo al conjunto de las organizaciones sindicales y sus líderes. Es importante tomar nota que el desprestigio social del sindicalismo tenía dos sustratos. Por una parte, los discursos sociales a favor del ajuste, las privatizaciones, la flexibilización y desregulación laboral habían impregnado fuertemente al conjunto de la sociedad y ello se traducía, entre otras cuestiones, en el desprestigio tanto de la actividad sindical en los lugares de trabajo, como de sus dirigencias. Por otra parte y en simultáneo, las organizaciones sindicales se mostraron impotentes frente a la ofensiva neoconservadora y no fueron minoría los dirigentes que sucumbieron frente a las nuevas “oportunidades de negocios” que se abrieron para ellos a partir de las reformas estructurales de los noventa. De modo que los sindicalistas durante esta etapa fueron blanco de ataque de los grupos dominantes y, al mismo tiempo, objeto de profundas críticas por parte de su propia base de representación.

En definitiva, tanto la CGT “oficial” como la CGT “Disidente” mantuvieron diversos encuentros e inclusive ar-

ticularon demandas de conjunto con los empresarios. Asimismo, las dos CGT se subordinaron a la lógica devaluacionista, una política que impactó profundamente sobre su propia base de representación. De este modo, se incorporaron de forma subordinada a la coalición neodesarrollista que comandó la salida de la crisis en 2002. Sin embargo, a pesar de haberse supeditado al programa económico del Grupo Productivo, los sindicalistas, en particular aquellos vinculados a la CGT Disidente y tiempo después los de la CTA, aportaron a la coalición neodesarrollista un conjunto de elementos que resultan centrales para la legitimación social de un proyecto que requería la recomposición político institucional como condición de posibilidad: una perspectiva antineoliberal, una visión del trabajo como integrador social y del salario como dinamizador del mercado interno, una alianza interclasista necesaria para concretar la vocación hegemónica de la gran burguesía productiva exportadora, una vinculación orgánica con el peronismo y el sistema político y, finalmente, la posibilidad (o la pretensión) de reencauzar de forma organizada la movilización social.²⁰

20. Para Cantamutto (2012) la modificación del tipo de cambio y el fin de la convertibilidad constituyeron los efectos de una disputa entre fracciones de la gran burguesía, que contaron con una participación y convalidación subordinada de una parte de la pequeña y mediana burguesía, y de los trabajadores. Siendo de gran

¿Sindicalismo populista?

En suma, a medida que el modelo de convertibilidad se agotaba, dis-

importancia la figura de Adolfo Rodríguez Saa, quien no sólo declaró oficialmente el *default*, sino que encauzó, según Cantamutto, la posibilidad de convergencia entre el Grupo productivo y los sectores de trabajadores. Sin embargo, los registros revisados para esta investigación y que han sido expuestos dan cuenta de una relación no sólo de fluidos y ambivalentes vínculos que se rastrea al menos desde 1999, sino también de tensión entre los sindicatos, los grupos empresarios y los gobiernos, que obligan sino a cuestionar, al menos matizar los alcances de la subordinación a los nucleamientos de la gran burguesía que impulsaron el fin de la convertibilidad y el rol asignado al efímero presidente Rodríguez Saa. Si bien, como argumenta López (2012), las resistencias de las clases subalternas al neoliberalismo no lograron constituir una alternativa política propia. Una mirada diferente sobre la participación sindical en estos procesos políticos y sociales ofrece el trabajo de Iñigo Carrera y Donaire (2002), quienes afirman que las centrales sindicales tuvieron una participación protagónica en los sucesos que concluyeron con la renuncia del presidente Fernando De La Rúa. En el mismo sentido se orienta el trabajo de Merino (2012), quien afirma que el movimiento obrero jugó un rol fundamental en la configuración de la realidad emergente y en la institución de un nuevo orden en la convertibilidad, imponiendo condiciones a la salida neodesarrollista impulsada por el grupo productivo a través de la devaluación. Según este trabajo, la CGT disidente en particular, se mostró oscilante en su relación con los distintos actores que comandaron este proceso hasta la asunción de Néstor Kirchner (el Grupo Productivo, el Movimiento Productivo Nacional, la Mesa de Diálogo Social y el gobierno de Duhalde).

tintos grupos sociales coincidieron de forma creciente en un conjunto de demandas y comenzaron a tejer alianzas. Algunas entidades empresarias y buena parte del movimiento sindical definieron intereses comunes y accionaron de forma conjunta. Debilitados y desarticulados como consecuencia de las políticas de ajuste, desregulación y achicamiento del aparato estatal, apertura económica y supremacía del capital financiero sobre las actividades productivas, las organizaciones de trabajadores y de empresarios convergieron en una alianza de carácter defensivo, en cuyo seno el socio menor –el movimiento sindical– se desempeñó de forma contradictoria, errática y fragmentada.

Con la agudización de la crisis, estos sectores conformaron un núcleo muy dinámico que jugó un papel preponderante cuando eclosionó el modelo de paridad cambiaria, aportando una alternativa de salida entre 2002 y 2003. Expresaron una coalición que delineó con trazos gruesos un programa neodesarrollista. Sin embargo, el rasgo sistémico de la crisis en curso puso muy pronto de manifiesto la existencia de vacancias, aún cuando ya se habían controlado las variables macroeconómicas más determinantes, con la modificación del tipo de cambio de la moneda y la cesación de pagos de la deuda externa.

La radicalización de la movili-

ción social y la crisis política provocada con la renuncia del presidente Fernando De La Rúa habían planteado un profundo cuestionamiento a las autoridades gubernamentales, al mismo tiempo que erosionaron definitivamente la legitimidad de los elencos dirigentes. De esta forma pueden comprenderse las dificultades que encontró el presidente provisional Eduardo Duhalde para conjugar consensos sociales. Tanto por el rechazo social que despertaban los sujetos de sus invocaciones –como los sindicalistas Luis Barrionuevo y Rodolfo Daer que fueron nombrados en el gabinete nacional– como por el propio desprestigio que afectaba al conjunto de las instituciones democráticas.

La emergencia del liderazgo de Néstor Kirchner puede leerse en este sentido, como una figura que logró ocupar el espacio vacante creado a partir del cuestionamiento popular al orden establecido. Representó la reposición de un núcleo de los cuadros políticos frente a los perdedores de la crisis. Interpretación semejante puede hacerse sobre las fracciones sindicales que lograron hacerse del control de la conducción de la CGT y retocar el equilibrio de fuerzas interno.

Luego de los comicios nacionales y la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación en 2003 tendrá lugar un nuevo reparto de barajas. Si durante el gobierno de Duhalde la fracción mayoritaria de la CGT conducida

por Daer ocupó, a través de sus aliados directos, lugares relevantes en la conducción del estado, revelando así la importancia asumida por el actor sindical en el proceso de recomposición político institucional requerida para emprender un nuevo ciclo; a partir de 2003, en cambio, asumirán mayor protagonismo las fracciones y nucleamientos del sindicalismo que habían ostentado capacidad de movilización y acumulado en ese sentido una experiencia de lucha anti-neoliberal, la CGT Disidente y en menor medida la CTA.

Si efectivamente el actor sindical tenía un nuevo papel en el ciclo económico, social y político abierto luego del fin de la convertibilidad, no podían de ninguna manera asumirlo aquella dirigencia que, en función de preservar su poder organizativo, había convalidado pasivamente las políticas neoliberales. Sin embargo, tampoco era asimilable a la necesaria recomposición institucional y política un modelo de sindicalismo incapaz de traducirse en un factor de poder, como el encarnado entonces por la CTA y la CCC, que habían permanecido completamente desvinculados de la CGT durante la década menemista y ostentaban, por ese motivo, una trayectoria intachable en términos de lucha y oposición al modelo periclitado. En el medio de estas dos opciones, la CGT Disidente, con el antecedente del MTA expresaba una contradictoria combinación de ambos modelos, y sumado a ello una singulari-

dad para nada menor: su capacidad de movilización, su poder de disrupción económica y el estilo de su liderazgo (Hugo Moyano), dotaban a este sector del movimiento obrero de las condiciones necesarias para constituirse como un factor de poder.

A diferencia de algunas interpretaciones sobre este fenómeno²¹, en este trabajo se sostiene que la “recuperación” del sindicalismo no ha sido meramente una invención gubernamental con el fin de recrear los términos de la vinculación orgánica de tipo populista, acorde con la morigeración de las demandas salariales tal como comenzó a ser requerido en el ciclo neodesarrollista. Desde nuestro punto de vista una multiplicidad de factores confluyeron para sellar la suerte de la relación entre sindicatos-estado-gobierno, dando lugar a una articulación compleja que no es pasible de ser explicada bajo el argumento de la integración vertical del sindicalismo al sistema político de signo peronista. De hecho, las tensiones derivadas de la

21. Para Bonnet y Piva (2012) la recuperación del sindicalismo peronista como mecanismo central institucionalizado de canalización de las luchas sociales: “... fue explícitamente impulsada, hasta cierto punto, por las administraciones kirchneristas mismas, que buscaron y encontraron en la recomposición de ciertos aspectos del viejo vínculo funcional entre direcciones sindicales y estado un mecanismo imprescindible para mantener los aumentos salariales dentro de las pautas compatibles con un no-disparamiento de los precios” (Bonnet y Piva, 2012: 25)

puja distributiva y la disputa política puesta de manifiesto a partir de 2008, amenazaron una y otra vez la estabilidad del vínculo entre estado y sindicatos, y la adhesión política de éstos a la conducción peronista.

En definitiva, el nuevo orden socioeconómico produjo una reorganización de las alianzas sociales y transformó el dinamismo sociopolítico de los diferentes actores. El bloque de poder emergente involucró a los grandes capitalistas de la fracción productiva exportadora (industrial y agroindustrial), pequeños y medianos empresarios dinamizados por el proceso de industrialización sustitutiva, una parte de los movimientos sociales que habían protagonizado el ciclo de luchas en años recientes y el sector mayoritario de las organizaciones sindicales.

En resumidas cuentas, hemos señalado que el neodesarrollismo como categoría de análisis social permite aproximarnos a las características del proyecto de la clase dominante en la postconvertibilidad. Sin embargo, desde esta óptica el elemento popular y obrero es incorporado de forma subordinada o considerado externo al proceso de relanzamiento de la valorización capitalista postneoliberal. Frente a estas limitaciones, con la noción de lo nacional popular se intentaron reponer en la discusión dos cuestiones. En primer lugar, que para poder articularse con pretensión hegemónica, las fracciones del capital coordinados

en torno al Grupo productivo necesitaron integrar en su coalición a las clases populares. Pero debido al carácter orgánico de la crisis en curso, no era posible en esa coyuntura incorporar a cualquier sector, sino únicamente a aquellos sectores con quienes, al menos en el corto plazo, era posible converger en términos de demandas económicas, sociales y políticas. Para los sectores del capital esta alianza se les imponía como una necesidad. El movimiento obrero ofrecía entre otras cosas: el carácter organizado de la movilización, una articulación orgánica con el estado y el sistema político, y un imaginario nacional popular ligado a la tradición peronista.

En segundo lugar, la noción de sindicalismo de masas populista contribuye a comprender las razones que llevaron a los sindicalistas a promover activamente junto a los empresarios la devaluación de la moneda como política macroeconómica en nombre de la “producción y el trabajo”, medida que impactó brutalmente sobre su propia base de representación, el conjunto de las y los trabajadores afectados por índices inéditos de indigencia, pobreza y desocupación. Al integrar una coalición interclasista, los sindicalistas de la CGT abandonaron sus premisas reivindicativas para concentrarse en la dimensión política de su funcionamiento, dando testimonio del rasgo disyuntivo que les es constitutivo.

Bibliografía

- Aboy Carles, G. (2005). “Populismo y democracia en la Argentina contemporánea. Entre el hegemonismo y la refundación”, *Estudios Sociales* n.º 28, primer semestre, pp. 125-137.
- Azpiazu, D. y Schorr, M. (2010). *Hecho en argentina. Industria y economía, 1976-2007*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Badaró, M. (2003). “El movimiento sindical regional: los camioneros y los judiciales”, en Jelin, E. (comp.): *Más allá de la Nación: las escalas múltiples de los movimientos sociales*, Buenos Aires, Libros del Zorzal.
- Basualdo, E. (2011). *Sistema político y modelo de acumulación. Tres ensayos sobre la Argentina actual*, Buenos Aires, Cara o Ceca.
- Bona, L. (2012). “Subsidios a sectores económicos en la Argentina de las postconvertibilidad: interpretación desde una perspectiva de clase”, en Feliz, Mariano y otros: *Más allá del individuo. Clases sociales, transformaciones económicas y políticas estatales en la Argentina contemporánea*, Buenos Aires, El Colectivo Editorial, pp. 103-124.
- Bonnet, A. (2008). *La hegemonía menemista. El neoconservadorismo en argentina (1989-2001)*. Buenos Aires, Editorial Prometeo.
- Bonnet, A. y Piva, A. (2012). “Un análisis de los cambios en la forma de estado en la posconvertibilidad”, en Griguera, J. (comp.): *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)*, Buenos Aires, Imago Mundi, pp. 3-31.
- Cantamutto, F. (2012). “Dinámica sociopolítica de la devaluación: alianzas disputas y cambio”, en Feliz, M. y otros: *Más allá del individuo. Clases sociales, transformaciones económicas y políticas estatales en la Argentina contemporánea*, Buenos Aires, El Colectivo Editorial, pp. 45-78.
- De Ipola, E. y Portantiero, J. C. (1994). “Lo nacional-popular y los populismos realmente existentes”, en Carlos, M. (comp.): *La democratización fundamental. El populismo en América Latina*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pp. 523-540.
- Etchemendy, S. y Collier, R. B. (2007). “Golpeados pero de Pie: Resurgimiento Sindical y Neocorporativismo Segmentado en Argentina (2003-2007)”, *Politics and Society* n.º 3, pp. 301-328.
- Feliz, M. (2012). “Proyecto sin clase: crítica al neoestructuralismo como fundamento del neodesarrollismo”, en Feliz, M. y otros: *Más allá del individuo. Clases so-*

ciales, transformaciones económicas y políticas estatales en la Argentina contemporánea. Buenos Aires, El Colectivo Editorial, pp. 13-43.

Gomez, M. (2009). “Un modelo de análisis para entender las transformaciones del sindicalismo durante los ’90 en la Argentina”, *Revista Conflicto Social*, año 2, n.º 2, diciembre, pp. 98-135.

Iñigo Carrera, N. (2010). “Indicadores de periodización (momentos de ascenso y descenso) en la lucha de clase obrera: la huelga general. Argentina, 1992-2002”, *Documentos y comunicaciones* n.º 72, Buenos Aires, Publicación del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA), pp. 165-185.

Iñigo Carrera, N. y Donaire, R. (2002). “¿Qué interés se manifiesta en las centrales sindicales argentinas?”, *Documentos y comunicaciones* n.º 38, Buenos Aires, Publicación del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA), pp. 132-192.

Kan, J. (2009). “Vuelta previa al 2001. La devaluación del real en 1999 y algunas implicancias en la burguesía argentina”, en Bonnet, A. y Piva, A. (comps.), *Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad*. Buenos Aires. Peña Lillo Ediciones Continente, pp. 223-251.

Laclau, E. (2014) [2005]. *La razón populista*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Lopez, E. (2012): “Las clases dominantes en el nuevo modo de desarrollo argentino. Cambios y continuidades en sus aspectos materiales (2002-2009)”, en Feliz, M. y otros: *Más allá del individuo. Clases sociales, transformaciones económicas y políticas estatales en la Argentina contemporánea*, Buenos Aires, El Colectivo Editorial, pp. 79-101.

Mackinnon, M. M. y Petrone, M. A. (1999). “Los complejos de la cenicienta”, en Mackinnon, M. M. y Petrone, M. A.: *Populismo y neopopulismo en América Latina, el problema de la cenicienta*, Buenos Aires, EUDEBA, pp. 11-52.

Martuccelli, D. y Svampa, M. (1999): “Las asignaturas pendientes del modelo nacional-popular. El caso peruano” en María Moira Mackinnon y Mario Alberto Petrone, *Populismo y neopopulismo en América Latina, el problema de la cenicienta*. Buenos Aires. EUDEBA, pp. 257-278.

Merino, G. (2012). “El movimiento obrero organizado, la crisis de 2001 y el gobierno de Duhalde. El caso de la CGT Disidente”, *Sociohistórica, Cuadernos CISH* 30, UNLP, La Plata, segundo semestre, pp. 87-119.

Murillo, M. V. (2013). “Cambio y continuidad del sindicalismo en democracia”,

Revista de la Sociedad Argentina de Análisis político SAAP, Vol. 7, N° 2, noviembre, pp. 339-348.

Piva, A. (2006). “El desacople entre los ciclos de protesta obrera y la acción de las cúpulas sindicales de Argentina (1989-2001)”, *Revista Estudios del Trabajo* N° 31, enero-julio, pp. 23-52. Disponible en URL: <http://www.aset.org.ar/docs/Piva%2031.pdf>.

Portantiero, J. C. (1987). *Los usos de Gramsci*. México, Folios Ediciones.

Portantiero, J. C. (1991). “Gramsci en clave latinoamericana”, en *Nueva Sociedad* n.º 115, septiembre-octubre, pp. 152-157.

Sigal, S. y Torre, J. C. (1994). “Sindicatos y trabajadores en la coyuntura populista”, en Carlos M. (comp.): *La democratización fundamental. El populismo en América Latina*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pp. 382-395.

Svampa, M. (2010). “Movimiento sociales, matrices-socio-políticos y nuevos escenarios en América Latina”, Working papers 01/2010, OneWorld Perspectives, URL: www.social-globalization.uni-kassel.de/owp.php.

Svampa, M. (2011). “Argentina una década después. Del “que se vayan todos” a la exacerbación de lo nacional-popular”, *Revista Nueva Sociedad* n.º 235, septiembre-octubre, pp. 17-34.

Touraine, A. (1999) [1987]. “Las políticas nacional-populares”, en Mackinnon, M. M. y Petrone, M. A.: *Populismo y neopopulismo en América Latina, el problema de la cenicienta*, Buenos Aires, EUDEBA, pp. 329-359.

Varesi, G. A. (2012). “Capítulo VIII: Modelo de acumulación, dinámica política y clases sociales en la Argentina postconvertibilidad?”, en Griguera, J. (comp.): *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)*, Buenos Aires, Imago Mundi, pp. 196-222.

Vilas, C. (2005). “La izquierda latinoamericana y surgimiento de regímenes nacional populares”, *Nueva Sociedad* n.º 197, mayo-junio, pp. 84-99.

Wainer, A. (2012). “Capítulo III: Cambios en el bloque de poder a partir deñ abandono de la convertibilidad ¿una nueva hegemonía?”, en Griguera, J. (comp.): *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)*, Buenos Aires, Imago Mundi, pp. 63-94.

Zavaleta Mercado, R. (1986). *Lo nacional popular en Bolivia*, México, Siglo XXI.

Zavaleta Mercado, R. (2006). “Formas de operar del Estado en América Latina

(bonapartismo, populismo, autoritarismo)”, en Ibarguen, M. A. y Norma de los Ríos Méndez (coords.): *René Zavaleta Mercado. Ensayos, testimonios y revisiones*, Buenos Aires, Miño y Dávila, FLACSO, México, UMSS-CESU, pp. 33-54.